Quinto.—Los liquidadores a que se refiere el número segundo de la presente Orden, una vez que hayan tomado posesión de sus cargos, procederán a publicar en el «Boletín Oficial del Estado» y en dos diarios de los de mayor circulación de la provincia sendos anuncios visados por la Intervención del Estado, haciendo público el domicilio de la oficina liquidadora, procedimiento para formular, en su caso, peticiones ante la misma y cualquier otro dato que, a juicio de los liquidadores o de la propia Intervención del Estado en la liquidación, se considere oportuno divulgar para la mayor eficacia de las operaciones liquidatorias y la máxima garantía de los asegurados, perjudicados y demás acreedores de la sociedad disuelta.

Lo que comunico a V. I.

Madrid, 11 de enero de 1984.—P. D. (Orden de 11 de febrero de 1983), el Secretario de Estado de Economía y Planificación, Miguel Ángel Fernández Ordóñez.

Ilmo. Sr. Director general de Seguros.

1515

ORDEN de 11 de enero de 1984 por la que se acuerda la liquidación forzosa e intervenida de la Entidad «Compañía de Seguros y Financiación, Sociedad Anónima» (COSEFISA).

Ilmo. Sr.: Por Resolución de la Dirección General de Seguros de 21 de octubre de 1982 se comunicó a la Entidad «Compañía de Seguros y Financiación, S. A.» (COSEFISA), que a 31 de diciembre de 1980 se encontraba incurso en la causa de disolución contemplada en el apartado primero del artículo 41 de la Ley de 16 de diciembre de 1954, advirtiéndole que si en el plazo de treinta días no había puesto remedio a su anómala situación o acordado su disolución, se incoaría el oportuno expediente sancionador.

Ante el incumplimiento de tales órdenes, la Dirección General de Seguros procedió a la incoación del expediente sancionador, con arreglo a lo dispuesto en los artículos 133 y siguientes de la Ley de Procedimiento Administrativo de 17 de julio de 1958, en el que resulta probado que la «Compañía de Seguros y Financiación, S. A.» (COSEFISA), continúa incurso al cierre del ejercicio 1982 en la precitada causa de disolución.

En su virtud, este Ministerio, a la vista de la documentación obrante en el expediente sancionador tramitado por la Dirección General de Seguros, así como de lo dispuesto en el artículo 47, en relación con el 49, de la Ley de 16 de diciembre de 1954, sobre Ordenación de los Seguros Privados, y a propuesta de V. I., ha dispuesto:

Primero.—Imponer a «Compañía de Seguros y Financiación, Sociedad Anónima» (COSEFISA), la sanción de liquidación forzosa e intervenida a que se refiere el artículo 47, apartado 5.º, de la Ley de 16 de diciembre de 1954, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 48 y 49 de dicha Ley, declarándola disuelta.

Segundo.—En el plazo de quince días, a partir de la publicación de la presente Orden en el «Boletín Oficial del Estado», la Entidad dará cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 118 del Reglamento de Seguros de 2 de febrero de 1912, sobre designación de liquidadores y sus normas de actuación, correspondiendo a los mismos la representación, administración y gestión de la Entidad durante el período de liquidación.

Tercero.—Durante el período de liquidación «Compañía de Seguros y Financiación, S. A.» (COSEFISA), conservará su personalidad jurídica, conforme establece el artículo 44 de la Ley de Seguros citada.

Cuarto.—Designar a los Inspectores del Cuerpo Técnico de Inspección de Seguros y Ahorro don Lino Domingo Llamas Mardurga para el cargo de Interventor del Estado titular en la liquidación de la referida Entidad, y don Joaquín de la Peña Martínez para el cargo de Interventor del Estado suplente en caso de ausencia o enfermedad del Interventor titular, con las facultades y funciones que al efecto el ordenamiento vigente señala y, en particular, la Orden de este Ministerio de 2 de septiembre de 1982.

Quinto.—Los liquidadores a que se refiere el número segundo de la presente Orden, una vez que hayan tomado posesión de sus cargos, procederán a publicar en el «Boletín Oficial del Estado» y en dos diarios de los de mayor circulación de la provincia sendos anuncios visados por la Intervención del Estado haciendo público el domicilio de la oficina liquidadora, procedimiento para formular, en su caso, peticiones ante la misma y cualquier otro dato que, a juicio de los liquidadores o de la propia Intervención del Estado en la liquidación, se considere oportuno divulgar para la mayor eficacia de las operaciones liquidatorias y la máxima garantía de los asegurados, perjudicados y demás acreedores de la sociedad disuelta.

Lo que comunico a V. I.

Madrid, 11 de enero de 1984.—P. D. (Orden de 11 de febrero de 1983), el Secretario de Estado de Economía y Planificación, Miguel Ángel Fernández Ordóñez.

Ilmo. Sr. Director general de Seguros.

1516

ORDEN de 11 de enero de 1984 por la que se autoriza a la firma «Papelera Guipuzcoana de Zicuñaga, S. A.» el régimen de tráfico de perfeccionamiento activo para la importación de pasta de madera química y la exportación de papel de impresión y escritura.

Ilmo. Sr.: Cumplidos los trámites reglamentarios en el expediente promovido por la empresa «Papelera Guipuzcoana de Zicuñaga, S. A.» solicitando el régimen de tráfico de perfeccionamiento activo para la importación de pasta de madera química y la exportación de papel de impresión y escritura, Este Ministerio, de acuerdo a lo informado y propuesto por la Dirección General de Exportación, ha resuelto:

Primero.—Se autoriza el régimen de tráfico de perfeccionamiento activo a la firma «Papelera Guipuzcoana de Zicuñaga, Sociedad Anónima», con domicilio en Hernani (Guipúzcoa) y NIF A-20003216.

Segundo.—La mercancía de importación será:

1. Pasta de madera química al sulfato blanqueada, de fibra larga con origen de Escandinavia, Canadá o norte de Estados Unidos, P. E. 47.01.71.

Tercero.—Los productos de exportación serán:

I. Papel de impresión y escritura, de edición, con un contenido igual o inferior al 5 por 100 de pasta mecánica, P. E. 48.01.80.

Cuarto.—A efectos contables se establece lo siguiente:

a) Por cada 100 kilogramos netos de la indicada mercancía de importación, realmente contenida en los papeles que se exporten, se podrán importar con franquicia arancelaria, o se datarán en cuenta de admisión temporal, o se devolverán los derechos sarancelarios, según el sistema a que se acoja el interesado, 100 kilogramos de la citada pasta de madera.

b) Se consideran pérdidas el 8,26 por 100 en concepto exclusivo de mermas.

c) El interesado queda obligado a declarar en la documentación aduanera de exportación y en la correspondiente hoja de detalle, por cada producto exportado, las composiciones de las materias primas empleadas, determinantes del beneficio fiscal, así como calidades, tipos (acabados, colores, especificaciones particulares, formas de presentación), dimensiones y demás características que las identifiquen y distinguan de otras similares y que, en cualquier caso, deberán coincidir, respectivamente, con las mercancías previamente importadas o que en su compensación se importen posteriormente, a fin de que la Aduana, habida cuenta de tal declaración y de las comprobaciones que estime conveniente realizar, entre ellas la extracción de muestras para su revisión o análisis por el Laboratorio Central de Aduanas, pueda autorizar la correspondiente hoja de detalle.

Quinto.—Se otorga esta autorización por un período de dos años, a partir de la fecha de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado», debiendo el interesado, en su caso, solicitar la prórroga con tres meses de antelación a su caducidad y adjuntando la documentación exigida por la Orden del Ministerio de Comercio de 24 de febrero de 1978.

Sexto.—Los países de origen de la mercancía a importar serán todos aquellos con los que España mantiene relaciones comerciales normales. Los países de destino de las exportaciones serán aquellos con los que España mantiene asimismo relaciones comerciales normales o su moneda de pago sea convertible, pudiendo la Dirección General de Exportación, si lo estima oportuno, autorizar exportaciones a los demás países.

Las exportaciones realizadas a partes del territorio nacional situadas fuera del área aduanera, también se beneficiarán del régimen de tráfico de perfeccionamiento activo, en análogas condiciones que las destinadas al extranjero.

Séptimo.—El plazo para la transformación y exportación en el sistema de admisión temporal no podrá ser superior a dos años, si bien para optar por primera vez a este sistema habrán de cumplirse los requisitos establecidos en el punto 2.4 de la Orden de la Presidencia del Gobierno de 20 de noviembre de 1975 y en el punto sexto de la Orden del Ministerio de Comercio de 24 de febrero de 1978.

En el sistema de reposición con franquicia arancelaria el plazo para solicitar las importaciones será de un año a partir de la fecha de las exportaciones respectivas, según lo establecido en el apartado 3.6 de la Orden de la Presidencia del Gobierno de 20 de noviembre de 1975.

Las cantidades de mercancía a importar con franquicia arancelaria en el sistema de reposición, a que tienen derecho las exportaciones realizadas, podrán ser acumuladas, en todo o en parte, sin más limitación que el cumplimiento del plazo para solicitarlas.

En el sistema de devolución de derechos el plazo dentro del cual ha de realizarse la transformación o incorporación y exportación de las mercancías será de seis meses.

Octavo.—La opción del sistema a elegir se hará en el momento de la presentación de la correspondiente declaración o licencia de importación, en la admisión temporal. Y en el momento de solicitar la correspondiente licencia de exportación, en los otros dos sistemas. En todo caso, deberán indicarse en

las correspondientes casillas, tanto de la declaración o licencia de importación como de la licencia de exportación, que el titular se acoge al régimen de tráfico de perfeccionamiento activo y el sistema elegido, mencionando la disposición por la que se le otorgó el mismo.

Noveno.—Las mercancías importadas en régimen de tráfico de perfeccionamiento activo, así como los productos terminados exportables quedarán sometidos al régimen fiscal de inspección.

Décimo.—En el sistema de reposición con franquicia arancelaria y de devolución de derechos, las exportaciones que se hayan efectuado desde el 31 de julio de 1983 hasta la aludida fecha de publicación en el «Boletín Oficial del Estado», podrán acogerse también a los beneficios correspondientes, siempre que se hayan hecho constar en la licencia de exportación y en la restante documentación aduanera de despacho la referencia de estar en trámite su resolución. Para estas exportaciones los plazos señalados en el artículo anterior comenzarán a contarse desde la fecha de publicación de esta Orden en el «Boletín Oficial del Estado».

Undécimo.—Esta autorización se regirá en todo aquello relativo a tráfico de perfeccionamiento y que no esté contemplado en la presente Orden, por la normativa que se deriva de las siguientes disposiciones:

Decreto 1492/1975 («Boletín Oficial del Estado» número 185). Orden de la Presidencia del Gobierno de 20 de noviembre de 1975 («Boletín Oficial del Estado» número 282).

Orden del Ministerio de Hacienda de 21 de febrero de 1976 («Boletín Oficial del Estado» número 53).

Orden del Ministerio de Comercio de 24 de febrero de 1976 («Boletín Oficial del Estado» número 53).

Circular de la Dirección General de Aduanas de 3 de marzo de 1976 («Boletín Oficial del Estado» número 77).

Duodécimo.—La Dirección General de Aduanas y la Dirección General de Exportación, dentro de sus respectivas competencias, adoptarán las medidas adecuadas para la correcta aplicación y desenvolvimiento de la presente autorización.

Lo que comunico a V. I. para su conocimiento y efectos. Dios guarde a V. I. muchos años. Madrid, 11 de enero de 1984.—P. D., el Director general de Exportación, Apolonio Ruiz Ligeró.

Ilmo. Sr. Director general de Exportación.

1517 RESOLUCION de 12 de diciembre de 1983, de la Dirección General de Gastos de Personal, por la que se hace pública la relación de aprobados definitivos que han de ser provistos de certificado de aptitud para el ejercicio de la profesión de Habilitado de Clases Pasivas, conforme a la Orden de 20 de octubre de 1982.

En cumplimiento de lo previsto en la instrucción 17 de la Orden de 20 de octubre de 1982 por la que se convocaron exámenes para la obtención del certificado de aptitud para el ejercicio de la profesión de Habilitado de Clases Pasivas,

Esta Dirección General ha formado, por orden de puntuación en los exámenes, dando preferencia a la mayor edad en caso de igual puntuación, la relación de aspirantes que, definitivamente, han obtenido dicho certificado, siguiente:

Número	Nombre y apellidos	Puntuación
1	D. Carmelo Sanz Andrés	22,45
2	D. Antonio García Hernández	22,35
3	D.ª María del Carmen Soler Andrés	21,12
4	D. José Angel Lázaro Rubio	20,80
5	D. José Gutiérrez/Bravo	20,05
6	D. Pablo Bernard Cabra	19,55
7	D. José Nieto Mateos	19,20
8	D. Miguel Angel Vilariño Ouro	18,88
9	D.ª Angela Turrientes Monteagudo	18,75
10	D. José Luis Aparicio Franco	18,60
11	D.ª Rosa Vidueros Soler de Cornellá	18,35
12	D. Luis Gragera Villalobos	18,30
13	D. José Manuel Hernández Ojeda	18,25
14	D. Luis Alberto Gómez García	17,75
15	D. José Capdevila Rodríguez	17,50
16	D.ª María Vidueros Soler de Cornellá	17,45
17	D. Santiago Jiménez la Blanca de Pitarque	17,35
18	D. Jorge Antonio Sebastián Pastor	17,29
19	D. Venancio Tomeo Perucha	17,07
20	D. José Ramón Ovalle Baelo	17,00
21	D.ª María del Carmen González Alonso	16,80
22	D. Javier Díaz Alvarez	16,72
23	D.ª María Dolores Pinedo Rozas	16,70
24	D. Javier Merino del Río	16,55
25	D. Tomás Tolosana Langa	16,50
26	D. Esteban Abadía Ereza	16,50
27	D. Domingo Alarcón Zamora	16,35
28	D. Andrés Provencio Barrio	16,25

Número	Nombre y apellidos	Puntuación
29	D. Miguel Izquierdo Rodríguez	16,10
30	D. Juan Carlos Fernández Bobadilla	15,95
31	D.ª María Pilar Puenña Díaz	15,75
32	D. Jesús Daunesse Batanero	15,70
33	D. Antonio Muñoz Delgado	15,50
34	D. Amado Melantuche Teissier	15,35
35	D. Miguel Angel Villalba Embid	15,05
36	D. Antonio Bros Rovira	14,75
37	D.ª María Desamparados García Giménez	14,80
38	D. Isidoro Rafael Pérez	14,60
39	D. Angel del Barrio Areñas	13,75
40	D.ª María del Mar Barrenechea Sánchez	13,20

Los relacionados cuentan con un plazo de quince días, contados a partir del siguiente al de la publicación de la presente Resolución en el «Boletín Oficial del Estado» y en el tablón de anuncios de esta Dirección General, para interponer contra la misma, si lo estima conveniente a su derecho, recurso de alzada ante el excelentísimo señor Ministro de Hacienda, al amparo de lo preceptuado en el artículo 122, 1 y 2, de la vigente Ley de Procedimiento Administrativo de 17 de junio de 1958.

Vencido el plazo aludido en el párrafo precedente, los relacionados podrán recoger el correspondiente certificado de aptitud en la Sección de Inspección de Habilitados, calle Almagro, número 34, en horas hábiles de oficina, o comunicar por escrito a este Centro directivo en qué Delegación o Depositaria Especial de Hacienda desean hacerse cargo de dicho certificado, cuya recepción, en todo caso, ha de hacerse necesariamente por el interesado previa identificación de su personalidad.

Madrid, 12 de diciembre de 1983.—El Director general, Manuel Balmaseda Arias-Dávila.

1518 BANCO DE ESPAÑA
Mercado de Divisas

Cambios oficiales del día 19 de enero de 1984

Divisas convertibles	Cambios	
	Comprador	Vendedor
1 dólar USA	158,520	158,880
1 dólar canadiense	127,006	127,453
1 franco francés	18,529	18,582
1 libra esterlina	224,496	225,641
1 libra irlandesa	175,449	176,483
1 franco suizo	71,113	71,435
100 francos belgas	277,666	278,785
1 marco alemán	56,664	56,895
100 liras italianas	9,326	9,353
1 florin holandés	50,389	50,584
1 corona sueca	19,415	19,483
1 corona danesa	15,660	15,711
1 corona noruega	20,250	20,322
1 marco finlandés	28,768	28,875
100 chelines austriacos	803,365	807,645
100 escudos portugueses	117,902	118,346
100 yens japoneses	67,891	68,191

**MINISTERIO DE OBRAS
PUBLICAS Y URBANISMO**

1519 ORDEN de 12 de diciembre de 1983 por la que se hace público el acuerdo por el que se dispone el cumplimiento en sus propios terminos de la sentencia recaída en el recurso contencioso-administrativo número 408.188/80.

Excmo. Sr.: En el recurso contencioso-administrativo seguido ante el Tribunal Supremo, con el número 408.188/1980, interpuesto por don Francisco García Salcines y otros, contra el Real Decreto 2830/1979, de 23 de noviembre, sobre modificación del Plan General del Area Metropolitana de Madrid, se ha dictado sentencia, con fecha 27 de mayo de 1983, cuya parte dispositiva, literalmente, dice: